



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Misión Permanente de Bolivia en Ginebra

NV-MBNU-118/2021

**La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra** presenta sus atentos saludos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y tiene el honor de referirse a la Comunicación Conjunta AL BOL 1/2021 enviada por diferentes Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Al respecto, la Procuraduría General del del Estado Plurinacional de Bolivia tiene a bien remitir la nota PGE-DESP No. 00331/2021 dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, con información y observaciones a la referida comunicación.

**La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra** aprovecha la ocasión para renovar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) las consideraciones más distinguidas.

Ginebra, 16 de abril de 2021



A la Honorable  
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
para los Derechos Humanos (OACNUDH)  
Ginebra.-



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

El Alto, 13 de abril de 2021  
**PGE-DESP N°00331/2021**  
**SPDRLE-DGDDHMA**

**Ref.: Remite escrito de información y observaciones  
a la Comunicación AL BOL 1/2021 de  
Procedimiento Especial**

De mi mayor consideración:

El Estado Plurinacional de Bolivia a tiempo de saludar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene a bien remitir el escrito de información y observaciones a la Comunicación AL BOL 1/2021 ("Comunicación").

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar a usted, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

  
**Wilfredo Chávez Serrano**  
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Señora:  
Verónica Michelle Bachelet Jeria  
**ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS**  
**OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS**  
**PARA LOS DERECHOS HUMANOS**  
Ginebra - Suiza  
WFDCS/PGM/JRBB/MNMP/ema  
Cc. Archivo

**¡La Patria no se vende, se defiende!**

**Oficina Central:** El Alto - Bolivia. Calle Martín Cárdenas, Esq. calle 11 de Junio, Zona Ferropetrol.  
Teléfono: (591) (2) 2173900 / Fax: (591) (2) 2118454  
[www.procuraduria.gob.bo](http://www.procuraduria.gob.bo)

## COMUNICACIÓN CONJUNTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

“SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL BOL 1/2021”

---

INFORME SOBRE EL PRESUNTO ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS,  
NIÑAS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO SU RECLUTAMIENTO COMO  
INTERMEDIARIOS PARA EL TRÁFICO DE DROGAS - COMUNIDAD AMAZÓNICA  
DE BELLA VISTA - BENI

---

El Alto, abril de 2021

Presentado por:

Abog. Wilfredo Franz David Chávez Serrano  
Procurador General del Estado

Abog. Patricia Guzmán Meneses  
Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado

Abog. Jhanneth del Rosio Bustillos Bustillos  
Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente

El Alto, Bolivia





## ÍNDICE

I.	REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO .....	1
	A. Representación legal del Estado.....	1
	B. Comunicaciones Oficiales .....	2
II.	ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN .....	2
III.	ARGUMENTOS ESTATALES EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 4	
	A. Medidas, legislación, campañas y políticas adoptadas por el Estado boliviano para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el acoso, trata de personas, violencia y explotación sexual.....	4
	B. Medidas adoptadas y aplicadas para garantizar la seguridad y derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.....	9
	C. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el acceso efectivo a los procedimientos de denuncia adoptados a los niños, niñas y adolescentes a otros mecanismo judiciales domésticos.....	12
	D. Medidas de reparación, rehabilitación y reintegración que disponen los niños y niñas que se habrían convertido en víctimas del acoso, trata de personas y violencia sexual por parte de personas coludidas con el narcotráfico.....	16
	E. Medidas y políticas que el Estado boliviano ha puesto en marcha para sacar a estos niños y niñas y a sus familias de la pobreza.....	18
	F. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar que los defensores de derechos humanos en Bolivia pueden desarrollar sus funciones sin miedo a sufrir actos de intimidación, acoso y represalias. ....	20
	G. Los hechos acontecidos con relación al 12 de junio de 2020 en la comunidad Amazónica de Bella Vista, en el departamento de Beni - Bolivia.....	21
IV.	CONCLUSIONES .....	23



## PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

### RESPUESTA DE ESTADO A LA COMUNICACIÓN CONJUNTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES “AL-BOL 1/2021”

#### I. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

##### A. Representación legal del Estado

1. De conformidad a lo establecido en los Artículos 229 y 231 (1) de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (“CPE”) y el Artículo 8, numeral 1 de la Ley N° 064 (“Ley 064”), de 5 de diciembre de 2010, modificada en parte por la Ley N° 768, de 15 de diciembre de 2015, la Procuraduría General del Estado (“Procuraduría” o “PGE”) es la institución de representación jurídica pública que ejerce la función suprema de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, entre cuyas funciones está la de defender judicial y extrajudicialmente al Estado asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales o extrajudiciales en materia de derechos humanos, en el marco de la Constitución y la ley.
2. De conformidad a lo establecido en el Artículo 230, Parágrafo II, de la CPE, mediante Decreto Presidencial N° 4390<sup>1</sup> de 12 de noviembre de 2020, se designó a Wilfredo Franz David Chávez Serrano como Procurador General del Estado, quien en virtud al mandato constitucional y al Artículo 11, Parágrafo I, de la Ley N° 064, se constituye en el representante legal del Estado en el marco de la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, encontrándose por tanto, debidamente legitimado para responder la presente Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales “AL-BOL - 1/2021” de la Organización de las Naciones Unidas.
3. Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 27259<sup>2</sup> de 23 de noviembre de 2020, se designó a Patricia Guzmán Meneses, como Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, quien junto a Jhanneth del Rosio Bustillos Bustillos, en su calidad de Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente, designada mediante Resolución Procuradural N° 169/2020<sup>3</sup> de 1 de diciembre de 2020, se encuentran plenamente acreditados para suscribir la presente respuesta de Estado.

<sup>1</sup> Decreto Presidencial N° 4390. (Anexo 1)

<sup>2</sup> Resolución Suprema N° 27259. (Anexo 2)

<sup>3</sup> Resolución Procuradural N° 169/2020. (Anexo 3)





## B. Comunicaciones Oficiales

4. El Estado boliviano solicita respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ("OACNUDH") que la remisión de los comunicados oficiales sea realizada al siguiente correo institucional de la Dirección General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambiente:

[direccionddhh@procuraduria.gob.bo](mailto:direccionddhh@procuraduria.gob.bo)

## II. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

5. El 12 de febrero de 2021, la OACNUDH, a través de la subdivisión de Procedimientos Especiales remitió al Estado Plurinacional de Bolivia ("Estado boliviano" o "Bolivia") la Comunicación AL BOL 1/2021 ("la Comunicación"), misma que fue enviada de manera conjunta por la Relatora Especial sobre la venta y explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de menores; la Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Relator sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
6. A través de la mencionada Comunicación, la OACNUDH expresó al Estado que tenía conocimiento del presunto abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, su reclutamiento como intermediarios para el tráfico de drogas en la comunidad Amazónica de Bella Vista, del departamento de Beni, añadiendo la presunta falta de investigación de los hechos por las autoridades competentes.
7. Específicamente, la OACNUDH señaló de que tenía información acerca de la situación del presunto tráfico de drogas en la comunidad Amazónica Bella Vista - Beni. Desde el año 2017, narcotraficantes y sus intermediarios estarían reclutando niñas, niños y adolescentes, en especial las niñas serían reclutadas como intermediarias para el tráfico de drogas, y que además se habrían convertido en víctimas de trata y violencia sexual; algunas de estas niñas serían indígenas Itonoma y/o Baurez.
8. En vista de esta situación, la OACNUDH solicitó al Estado cooperación y observaciones sobre los siguientes aspectos:





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

1. *“Por favor, proporcione cualquier información adicional y cualquier comentario que el Gobierno de Su Excelencia pueda tener sobre las alegaciones mencionadas.*

2. *Por favor, facilite detalles, y en su caso los resultados, de cualquier investigación judicial o de otro tipo que se haya llevado a cabo en relación con las alegaciones mencionadas. Si no se ha llevado a cabo ninguna investigación, o si ésta no ha sido concluida, explique porque.*

3. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas, políticas y/o campañas públicas que el Gobierno de su excelencia ha puesto en marcha para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el acoso, trata de personas, violencia y explotación sexual que podría constituir esclavitud sexual, inducción al consumo de drogas y bebidas alcohólicas; pobreza y degradación del medio ambiente, entre otros abusos.*

4. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, y en particular el derecho a la defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente, efectivo y sin dilaciones.*

5. *Sírvase indicar las medidas que el Gobierno de su Excelencia ha adoptado, o está considerando adoptar, para garantizar el acceso efectivo a los procedimientos de denuncia adaptados a los niños y a otros mecanismo judiciales domésticos.*

6. *Sírvanse proporcionar información sobre las medidas de reparación, rehabilitación y reintegración de que disponen los niños y niñas que se habrían convertido en víctimas del acoso, trata de personas y violencia sexual por parte de personas coludidas con el narcotráfico.*

7. *Sírvase proporcionar información sobre las medidas y políticas que el Gobierno de su Excelencia ha puesto en marcha para sacar a estos niños y niñas y a sus familias de la pobreza.*

8. *Por favor indique las medidas adoptadas para garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos en Bolivia pueden desarrollar sus funciones sin miedo a sufrir actos de intimidación, acoso o represalias de ningún tipo.”*

9. Asimismo, esta instancia internacional otorgó al Estado boliviano un plazo de 60 días para remitir la información solicitada e informó que transcurrido este plazo la Comunicación y toda





respuesta recibida por Bolivia, se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones, además que se elevará un informe habitual al Consejo de Derechos Humanos.

### III. ARGUMENTOS ESTATALES EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

- A. En virtud a la solicitud realizada por la OACNUDH, el Estado boliviano responderá de manera precisa e integral desarrollando los siguientes aspectos: **A)** medidas adoptadas por el Estado boliviano para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el acoso, trata de personas, violencia y explotación sexual; **B)** medidas adoptadas y aplicadas para garantizar la seguridad y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes; **C)** medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el acceso efectivo a los procedimientos de denuncia adoptados a los niños, niñas y adolescentes a otros mecanismo judiciales domésticos; **D)** medidas de reparación, rehabilitación y reintegración que disponen los niños y niñas que se habrían convertido en víctimas del acoso, trata de personas y violencia sexual por parte de personas coludidas con el narcotráfico; **E)** medidas y políticas que el Estado boliviano ha puesto en marcha para sacar a estos niños y niñas y a sus familias de la pobreza; **F)** medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar que los defensores de derechos humanos en Bolivia puedan desarrollar sus funciones sin miedo a sufrir actos de intimidación, acoso y represalias **G)** los hechos acontecidos con relación al 12 de junio de 2020 en la comunidad Amazónica de Bella Vista, en el departamento de Beni – Bolivia.

**A. Medidas, legislación, campañas y políticas adoptadas por el Estado boliviano para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el acoso, trata de personas, violencia y explotación sexual.**

10. Bolivia como Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificado mediante Ley N°3107 de 2 de agosto de 2005<sup>4</sup>, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, ratificado por el Estado Boliviano mediante Ley N°2273 de 22 de noviembre de 2001<sup>5</sup>, complementa la Convención de las Naciones Unidas y al ser los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos parte del bloque de constitucionalidad, el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido una serie de obligaciones encaminadas a prevenir, combatir y proteger a las víctimas de la trata y tráfico de personas.
11. Una de las grandes transformaciones que ha vivido el Estado Plurinacional de Bolivia se relaciona con la consagración de un amplio catálogo de derechos fundamentales en la

<sup>4</sup>Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/LEY%203107> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>5</sup>Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/LEY%202273> (Verificado el 20 de marzo de 2021)







Constitución Política del Estado (“CPE”), que establece, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica y la prohibición a que las personas sean sometidas a servidumbre, trata y tráfico de personas.

12. El Estado boliviano a través de la CPE en sus Artículos 58<sup>6</sup>, 59<sup>7</sup>, 60<sup>8</sup> y 61<sup>9</sup> reconoce los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en ese marco constitucional, se han desarrollado una serie de medidas legislativas, políticas públicas y acciones de carácter integral para prevenir y combatir la trata, tráfico de personas y los delitos conexos en el país. En ese contexto, se realizó la conformación del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas<sup>10</sup>, instancia máxima de coordinación y representación para formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de género, generacional e interculturalidad. Este Consejo se encuentra conformado por instituciones del Órgano Ejecutivo, instituciones de defensa de la sociedad y sociedad civil organizada, cuya Presidencia es asumida por el ahora Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (“MJTI”).
13. Asimismo, el Código Niña, Niño y Adolescente Ley N°548 de 17 de julio de 2014<sup>11</sup> (“Ley 548”), en sus Artículos 145, 147, 148 y 149 garantiza el derecho a la integridad personal y protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, en ese contexto conforme lo dispuesto por la Ley mencionada, el Estado boliviano a través del MJTI y su Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores (“DGNPAM”), tiene la atribución de formular, dirigir, coordinar y administrar las políticas en los siguientes ámbitos: Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINNA), Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en todos los niveles del Estado, y el sector privado. Es fundamental resaltar que dentro del marco jurídico

<sup>6</sup>Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescente son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

<sup>7</sup>Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional legido por la persona responsable de su cuidado. V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

<sup>9</sup>Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.

<sup>10</sup>Artículo 7. Se crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, como instancia máxima de coordinación y representación, para formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de género, generacional e interculturalidad.

<sup>11</sup>Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/LEY%20548> (Verificado el 16 de marzo de 2021)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

de la Ley 548, en sus Artículos 163, 164 y 165 hacen referencia y regulan las Políticas y las Medidas de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente.

14. Por otra parte, la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Ley N° 263 de 31 de Julio de 2012<sup>12</sup> ("Ley 263"), tiene la atribución de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, establecer medidas de prevención, implementar políticas públicas de protección, atención y reintegración para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. En ese contexto, uno de los mandatos dispuestos en la Ley 263, es la de formular y aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 2015-2019<sup>13</sup>, instrumento que fue elaborado y consensuado con todas las instituciones que conforman el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, en cumplimiento a ello, el año 2014 se aprobó la "Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas", instrumento base para la planificación plurianual de acciones de lucha contra la trata y tráfico de personas. En el año 2015 se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, instrumento cuyo alcance abarca de los años 2015 al 2019 y cuenta con ocho programas de carácter integral sobre la prevención, atención, protección, atención y reintegración a las víctimas, así como para la sanción y persecución penal de los delitos de trata y tráfico de personas y medidas de coordinación nacional e internacional.
15. En ese contexto, cumpliendo sus obligaciones legales, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, aprobó el "Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2016 - 2020" ("PMDI-CTTP")<sup>14</sup> establece acciones en el marco de cinco dimensiones o políticas<sup>15</sup> con un enfoque de género, generacional y equidad en el marco del respeto de los derechos humanos, entre estas dimensiones está la de Atención y Protección, en la cual existen acciones específicas, a saber:

<sup>12</sup>Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/LEY%20263> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>13</sup>Disponible en: <http://www.aunaobserva.org/observatorio/wp-content/uploads/2018/03/PLAN-NACIONAL-DE-LUCHA-CONTRA-LA-TRATA-Y-TRAFICO-DE-PERSONAS.pdf> (Verificado el 1 de abril de 2021)

<sup>14</sup>Disponible en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/plan-multisectorial-de-desarrollo-integral-para-la-lucha-contra-la-trata-y-trafico-de-personas-2016-2020.pdf>. Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la lucha contra la trata y Tráfico de Personas (2016-2020). pg. 67.

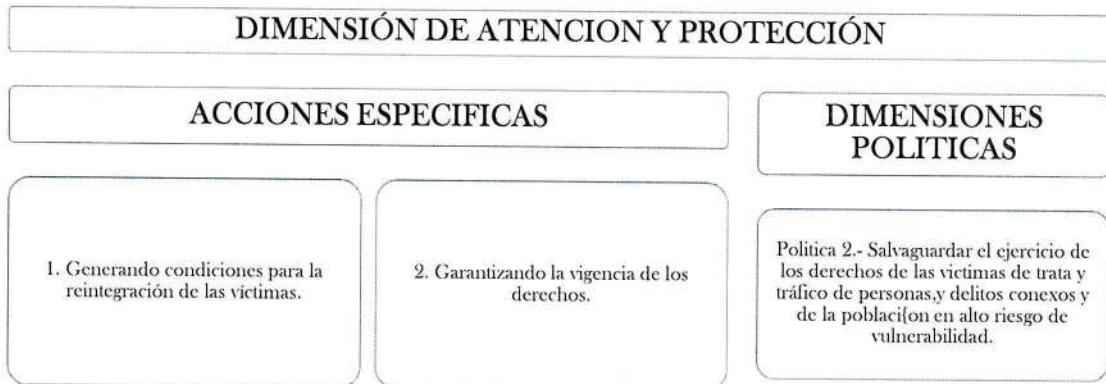
<sup>15</sup>Prevención; atención y protección; persecución y sanción penal; coordinación internacional y coordinación nacional.







ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado



Fuente: Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas (2016-2020)

16. Asimismo, la Ley 263 prevé la creación de los Consejos Departamentales, cuyas competencias previstas en el Artículo 17 se encuentran: formular, implementar y ejecutar un Plan Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, en sujeción a la Política Plurinacional y al Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y Delitos Conexos; asimismo, los planes departamentales se constituyen en el instrumento de planificación y coordinación de las distintas instituciones departamentales, que realizan acciones contra los delitos de trata y tráfico de personas. En cumplimiento de este mandato legal, las instancias que forman parte de los consejos departamentales, aprobaron sus respectivos Planes Departamentales, desarrollando acciones referentes a la atención y protección de víctimas de trata y tráfico de personas, y delitos conexos; así en el Departamento de Beni se tiene lo siguiente:





## PLANES DEPARTAMENTALES CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, Y DELITOS CONEXOS BENI (2015-2020)

**PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL PLAN:** Los reportes oficiales señalan que no existen un número significativo de casos de trata o tráfico de personas, no se ha desarrollado una estructurainstitucional efectiva para tender a las víctimas. No obstante, debido al desconocimiento de la problemática se presume que muchas personas no denuncian o no asumen que son víctimas de trata.

### ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN:

Fortalecimiento (Infraestructura y equipamiento) del centro transitorio departamental de atención integral a víctimas (Villazón) y apoyo y asistencia para reinserción laboral y/o económica de las víctimas.

### ANÁLISIS

El Plan Departamental establece que el Consejo Departamental debe "Promover el fortalecimiento y/o creación de centros de acogida especializados en víctimas de trata y tráfico, para que los mismos se constituyan en un servicio que además de brindar un espacio físico y/o de residencia temporal a las víctimas pueda otorgar un servicio multidisciplinario (psicológico, social, jurídico e incluso de formación técnica) que impulse el fortalecimiento de la autoestima de las víctimas y la recuperación de su proyecto de vida"

En el Plan Departamental se señala que para el logro de los programas se ha previsto un presupuesto plurianual; asimismo, las fuentes de financiamiento se concretarán de acuerdo al Artículo 13 de la Ley N° 263 conforme a las gestiones y decisiones promovidas desde el Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, sin detallar el monto asignado.

Fuente: Plan Departamental del Beni

17. Por su parte, a través del informe de la Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales (DGJDF)<sup>16</sup> del MJTI se tiene conocimiento que el año 2007 se crearon en los nueve departamentos del país las mesas departamentales contra la violencia sexual comercial, a iniciativa del entonces Viceministerio de Asuntos de Género, Generacional y Familia, con el apoyo de UNICEF.

18. Ahora bien, de acuerdo a lo descrito *ut supra*, es evidente que el Estado, diseñó e implementó políticas destinadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, trata y tráfico de personas o delitos conexos. Asimismo, cabe denotar que estas medidas diseñadas bajo el paraguas de la CPE, son implementadas en todos los niveles del Estado, es decir en el central, departamental y municipal.

<sup>16</sup> Informe MTJI-VDJF-DGJDF-ATTP N°017/2021 emitido por el Director General de Justicia y Derechos Fundamentales. (Anexo 4)





**B. Medidas adoptadas y aplicadas para garantizar la seguridad y derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.**

19. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado de 7 de febrero de 2009<sup>17</sup> ("D.S. 29894"), el Ministerio de Gobierno, tiene la atribución de formular, dirigir y coordinar políticas para la seguridad pública del Estado, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social. Adicionalmente, la Ley 263 y su reglamento Decreto Supremo N° 1486 de 6 de febrero de 2013<sup>18</sup> ("D.S. 1486"), disponen la participación de dicha cartera de Estado desde las siguientes unidades organizacionales:

- La Dirección General de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, la cual se encargará de impulsar y realizar acciones integrales de lucha contra la trata y tráfico de personas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- El Observatorio de Seguridad Ciudadana, el cual debe crear un sistema de información y estadísticas que permita el registro de datos sobre delitos de trata y tráfico de personas; realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas e indicadores de lucha contra la trata y tráfico de personas.
- La Dirección General de Migración, la cual debe coadyuvar en la repatriación de víctimas bolivianas de trata y tráfico de personas en el exterior; implementar protocolos de actuación nacional e internacional para la detección temprana de situaciones de trata y tráfico de personas; y realizar los controles migratorios respectivos para el ingreso, salida y permanencia de territorio boliviano de personas nacional y extranjeras.

20. Al respecto, resulta necesario señalar el contenido del Derechos a la Educación se encuentra consagrado en el Artículo 17<sup>19</sup>, 77 y siguientes de la CPE; la Ley 548, tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente. En sus Artículos 115<sup>20</sup> y 116<sup>21</sup> garantiza el derecho a la educación gratuita e integral, de calidad, sin violencia, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral. Por otra parte, los

<sup>17</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/decreto%20supremo%2029894> (Verificado el 22 de marzo de 2021)

<sup>18</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/decreto%20supremo%201486> (Verificado el 18 de marzo de 2021)

<sup>19</sup> Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

<sup>20</sup> Artículo 115. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales.

<sup>21</sup> Artículo 116. I. El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente. II. La implementación del modelo educativo tiene como núcleo los derechos de la niña, niño y adolescente, su desarrollo integral y la calidad de la educación.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

Artículos 150<sup>22</sup>, 151<sup>23</sup>, 152<sup>24</sup> y 156<sup>25</sup> tienen como finalidad la prevención, atención y sanción de la violencia que pueda ser ejercida dentro del Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia; sancionando todo tipo de violencia y estableciendo medidas preventivas y de protección.

21. En ese contexto, se aprobó el Código de las Familias y del Proceso Familiar Ley N° 603 de 19 de noviembre de 2014<sup>26</sup> ("Ley 603") misma que dentro de su marco normativo, señala que el Estado, las familias y la sociedad garantizarán la preeminencia de los derechos, la primacía en recibir protección y atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes<sup>27</sup>. Del mismo modo, la Ley N° 263 en sus Artículos 26 y 27, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y otras entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental y municipal implementará protocolos de actuación nacional e internacional para la detección temprana de situaciones de Trata y Tráfico de personas y delitos conexos.
22. Por su parte, el D.S. 1486 y el D.S. 29894, disponen que el Ministerio de Educación, tiene la atribución de formular políticas y estrategias intraculturales, interculturales y plurilingües de Educación en el Estado. La Ley N° 263 y su decreto reglamentario disponen que dicha instancia diseñará y aplicará programas, campañas educativas y otros para la prevención de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, con enfoque interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, primario, secundario y otros niveles de formación académica. A su vez cabe señalar que el Estado otorga educación gratuita en todos los niveles, incluyendo en la educación superior, cuya inversión el año 2013, fue de 15 mil millones de bolivianos<sup>28</sup>. Desde el 2009, se otorgan diplomas de bachiller de forma gratuita a estudiantes egresados de las diferentes unidades educativas del país. La Ley de Educación de "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010<sup>29</sup> ("Ley 070") establece que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos ("NPIOCyA") tienen la responsabilidad de construir currículas regionalizadas, que recoge sus saberes y conocimientos, valores y cosmovisiones para ser incorporados en la currícula educativa. Desde el 2013 las naciones originarias aymara, quechua, guaraní, chiquitano, ayoreo, guarayo y moxeño son parte

<sup>22</sup> Artículo 150. La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la interculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros.

<sup>23</sup> Artículo 151. (tipos de violencia en el sistema educativo).

<sup>24</sup> Artículo 152. (medidas preventivas y de protección en el sistema educativo).

<sup>25</sup> Artículo 156. I. En todos los niveles del Estado, se deberá contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o adolescente. II. El Ministerio Público, Jueces y Jueces Públicos de Niñez y Adolescencia, están obligados a coordinar con las instancias que correspondan, el desarrollo de acciones especiales que eviten la revictimización de la niña, niño o adolescente.

<sup>26</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/LEY%20603> (Verificado el 26 de marzo de 2021)

<sup>27</sup> Artículo 6. i) El Estado, las Juntas Locales de Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente. El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar.

<sup>28</sup> Disponible en: [http://scie.minedu.gob.bo/pdfs/REVOLUCION\\_EDUCATIVA.pdf](http://scie.minedu.gob.bo/pdfs/REVOLUCION_EDUCATIVA.pdf)

<sup>29</sup> Disponible en: [https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1524:ley-avelino-sinani-elizardo-perez&catid=233&Itemid=933](https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1524:ley-avelino-sinani-elizardo-perez&catid=233&Itemid=933) (Verificado el 4 de abril de 2021)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

de esta nueva transformación de la educación. El Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí puedo” y el Programa Nacional de Post-Alfabetización “Yo sí puedo seguir”, beneficiaron especialmente a la población de zonas periurbanas y zonas rurales.

23. Al respecto, resulta necesario señalar que el BONO JUANCITO PINTO (“BJP”) establecido por Decreto Supremo N° 28899 de 26 de octubre de 2006<sup>30</sup> (“D.S. 28899”), es parte de las políticas de acción inmediata de protección social y redistribución de los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); constituye en un incentivo a la matriculación, acceso y permanencia en la escuela en el marco del objetivo de universalización de nivel primario y reducir las tasas de deserción y abandono, es un subsidio equivalente a Bs 200 anuales, otorgado por el Gobierno Central a niñas y niños de escuelas públicas entre primero y quinto de primaria, gradualmente se amplía la cobertura hasta cubrir a todo el universo de estudiantes de primaria y secundaria de acuerdo al siguiente respaldo normativo:

DECRETO SUPREMO	FECHA	OBJETO
N° 28899	26 de diciembre de 2006	Instituye el BJP para niñas y niños de 1° a 5° de primaria.
N° 29321 <sup>31</sup>	24 de octubre de 2007	Amplia la cobertura a estudiantes hasta 6° de primaria.
N° 29652 <sup>32</sup>	23 de julio de 2018	Amplia la cobertura a estudiantes hasta 8° de primaria incluye alumnos (as) de Educación Especial y Educación Alternativa.
N° 2141 <sup>33</sup>	9 de octubre de 2014	Amplia cobertura a estudiantes de 6° secundaria.

<sup>30</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/%20%20Decreto%20Supremo%2028899> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>31</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/decreto%20supremo%20%2029321> (Verificado el 8 de abril de 2021)

<sup>32</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/decreto%20supremo%20%2029652> (Verificado el 8 de abril de 2021)

<sup>33</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/decreto%20supremo%202141> (Verificado el 8 de abril de 2021)

24. De acuerdo a la información obtenida de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia<sup>34</sup>, desde la gestión 2019 a través de su Aula Virtual, ha desarrollado ocho (8) procesos de formación para servidores públicos y profesionales relacionados al área sobre temas de prevención de violencia y trata y tráfico de personas. El proceso incluyó la participación de 2.973 servidores públicos de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) de los gobiernos municipales a nivel nacional, como de personal miembro de la Policía Boliviana.
25. De lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano a través de las instancias correspondientes implementó medidas dirigidas para garantizar el derecho a la seguridad y a la educación de las niñas, niños y adolescentes; asimismo, es importante mencionar las políticas de Estado que se implementaron y el ascenso de beneficiarios en los últimos años consecuencia de los bonos, programas campañas.

**C. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar el acceso efectivo a los procedimientos de denuncia adoptados a los niños, niñas y adolescentes a otros mecanismo judiciales domésticos.**

26. Al respecto, es necesario señalar que las garantías del acceso a una administración de justicia pronta y eficaz en el marco de denuncias realizadas por víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de personas se encuentra consagrado en la CPE de Bolivia en el Artículo 60<sup>35</sup>; y el Decreto Supremo N° 3463 de 18 de enero de 2018<sup>36</sup> ("DS 3463") que tiene por objeto garantizar la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia.<sup>37</sup> Al respecto, resulta necesario señalar el Libro II, III y los Artículos 154, 155, 157 y 177 de la Ley 548, se encuentra consagrado el procedimiento común, un procedimiento especial y Sistema Penal para Adolescentes, acciones de defensa, derecho de acceso a la justicia con enfoque restaurativo, atención especializada, procedimientos ágiles, oportunos, la protección, restitución y restauración de los derechos de la niña, niño y adolescente, fundamentalmente en preeminencia de sus derechos que implica también, la garantía del Estado de procurar su integridad física, psicológica y sexual; prohibiendo toda forma de conciliación o transacción.

<sup>34</sup> Informe DP-ADC-UDDH-029-2021 de 19 de marzo de 2021, emitido por el Delegado Defensorial Departamental del Beni. (Anexo 5)

<sup>35</sup> Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

<sup>36</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/%20%20Decreto%20Supremo%203463> (Verificado el 2 de abril de 2021)

<sup>37</sup> Artículo 1. El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia, en el marco del interés superior del niño, en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.







27. De igual forma, mediante D.S. 3463, se creó el Registro Único de Abogadas y Abogados defensores de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos de Violencia - RUANNA<sup>38</sup> y a través de la Resolución Ministerial 39/2018 de 2 de abril de 2018<sup>39</sup>, emitida por el MJTI se aprueba el Reglamento para el registro, capacitación, seguimiento y evaluación de la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia, el cual ofrece un servicio legal gratuito, fundado en la especialización de profesionales en ciencias jurídicas bajo el enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia, con el objetivo de garantizar la asistencia en la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos de violencia, en el marco del interés superior del niño, en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales.
28. En ese sentido, el Estado boliviano a través del MJTI impulsó la Defensa Técnica, Gratuita y Especializada de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos de Violencia, para que los abogados certificados por la institución puedan apersonarse e intervenir en el marco del interés superior del niño, a fin de garantizar sus derechos<sup>40</sup>. Es importante señalar que a través del informe de Rendición de Pública de Cuentas Final 2018 de MJTI<sup>41</sup>, se tiene el registro y matriculación de 492 abogadas y abogados, para la defensa técnica, gratuita y especializada de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos de Violencia.
29. De acuerdo con la información obtenida a través del MJTI en fecha 23 de marzo de 2021<sup>42</sup>, se cuenta con un Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual, mismo que tiene como uno de sus objetivos, contar con una línea base sobre el número de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual, reconocimiento de factores que influenciaron en la situación, características y proceso judicial.
30. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 071/2016 de 9 de febrero de 2016 emitida por el MJTI, se crea el Sistema de Información de NNA (SINNA), para registrar y centralizar la información especializada sobre los derechos de la niñez y adolescencia, así como otros datos para la adopción y monitoreo de políticas públicas. Actualmente, éste se encuentra en etapa de implementación y está compuesto por cinco (5) módulos:
- Módulo de información de Defensorías - MID: realiza el registro de información de los casos atendidos por las DNA nivel nacional, lo que permitirá generar estadísticas

<sup>38</sup> Disponible en: <https://ruanna.justicia.gob.bo/#/> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>39</sup> Disponible en: [https://rpa.justicia.gob.bo/rpa/app/images/marcolegal/013\\_Reglamento\\_RUANNA\\_Completo.pdf](https://rpa.justicia.gob.bo/rpa/app/images/marcolegal/013_Reglamento_RUANNA_Completo.pdf) (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>40</sup> Artículo 8. IV. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, podrá designar a profesionales inscritos en el Registro Único de Abogadas y Abogados para la Defensa Técnica, Gratuita y Especializada de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos de Violencia, para apersonarse e intervenir en el marco del interés superior del niño, en casos donde los agresores sean los progenitores o personas encargadas de la guarda o tutela de la niña, niño y adolescente.

<sup>41</sup> Disponible en:

<http://portal.transparencia.gob.bo/sagt/sites/default/files/theme/backgrounds/DIAPOSITIVAS%20RENDICION%20PUBLICA%20FINAL%202018-.pdf> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>42</sup> Ver Anexo 4



nacionales, departamentales y municipales sobre la atención de vulneración de los derechos de las NNA, características de funcionamiento institucional, acciones de prevención y restitución de derechos desde junio de 2018, las DNA realizan el proceso de registro de casos.

- Módulo del Sistema Penal para adolescentes - MOSPA: Dirigido a registrar seguimiento a adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida socioeducativa en libertad en el Centro de Orientación o en privación de libertad en centros de Reintegración social a nivel nacional.
- Módulo de Familias - MODEFA: Proporcionará información estadística a nivel nacional por cada Centro de Acogida de NNA sin cuidado parental, por lo que se constituirá en un referente para la generación de información base para la concepción, diseño, seguimiento y evaluación del impacto de políticas aplicadas en la temática niñez y adolescencia.
- Módulo de Información sobre Desarrollo Integral de la Primera Infancia -MODIPI: Realizar el seguimiento del cumplimiento de los derechos de la primera infancia. El mencionado módulo relevará, sistematizará, analizará y difundirá información sobre el desarrollo integral de primera infancia.
- Módulo Libre de Violencia - MOLIV: Gestionará y administrará específicamente los casos de violencia sexual contra la NNA a nivel nacional, departamental y municipal.

31. Asimismo, el MJTI fijó la construcción de una cultura de buen trato denominada “#YoPorLaNiñez”<sup>13</sup>, basada en la difusión de mensajes de amor y protección de las niñas, niños y adolescentes, la prevención de delitos contra la niñez y adolescencia, el acceso a la justicia y la restitución de derechos de estas víctimas.

32. Asimismo, mediante D. S. 3463, se desarrollaron los contenidos mínimos para la difusión de los derechos, deberes y garantías de niñas, niños y adolescentes, para que sean emitidos de forma gratuita por los medios de comunicación, públicos y privados, a través de cuñas, spots, jingles ante la prensa u otros formatos comunicacionales, idiomas oficiales de acuerdo a la región y audiencia. El objetivo es la difusión de mensajes comunicacionales que permitan profundizar la transformación de las conductas nocivas, que naturalizan la discriminación, la violencia y el abandono social, familia y comunitario de niñas, niños y adolescentes, en base a principios rectores fundamentales, como el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación y la participación.

<sup>13</sup>Ver Anexo 4







33. De la misma forma, la Ley N°1173 de 3 de mayo de 2019<sup>14</sup>, adopta medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres y prevé protección especial en delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, con el objeto de evitar mayores consecuencias y reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Asimismo, modifica el Artículo 393 octer. del Código de Procedimiento Penal, prohibieron la revictimización, debiendo la jueza, el juez o el fiscal, disponer que los testimonios o declaraciones que deba prestar la víctima sean realizados por una sola vez y con carácter privado, con el auxilio de familiares o peritos especializados.
34. Al respecto, resulta necesario señalar que los Gobiernos Municipales, a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tienen la responsabilidad de prestar servicios públicos de defensa psico-socio-jurídico de manera gratuita, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos, importante recalcar que esta responsabilidad corresponde conjuntamente con los Gobiernos de las autonomías Indígena Originario Campesinas en su respectiva jurisdicción.
35. Por su parte, el Ministerio Público informó sobre el avance de la Estrategia de protección a víctimas de trata de personas y delitos conexos y del manual de investigaciones especiales el cual contiene directrices para la investigación de trata de personas. También resalta que se inició el proceso para la implementación de las Fiscalías Corporativas Antitrata de Personas en tres focos estratégicos, y la implementación de la División Forense Antitrata y Pornografía en el Instituto de Investigaciones Forense (IDIF)<sup>15</sup>.
36. Por su parte el MJTI, a través de la rendición pública de cuentas finales 2018<sup>16</sup> se tiene como resultados logrados dentro de la lucha contra la trata y tráfico de personas: 9 Consejos Departamentales de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas constituidos, de los cuales 8 cuentan con sus planes aprobados.
37. En este sentido, de acuerdo a la información proporcionada por el MJTI<sup>17</sup>, el Estado boliviano informa que en cumplimiento del ordenamiento jurídico y de las políticas de Estado se garantiza el acceso efectivo a los procedimientos de denuncias en especial para las niñas, niños, y adolescentes víctimas de violencia sexual, trata de personas y delitos conexos.

<sup>14</sup>Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/ley%201173> (Verificado el 4 de abril de 2021)

<sup>15</sup>Disponible en: <http://scm.oas.org/pdfs/2019/CP40376SINFORMETRATA.pdf> (Verificado el 18 de marzo de 2021)

<sup>16</sup>Disponible en: <http://portal.transparencia.gob.bo/sagt/sites/default/files/theme/backgrounds/DIAPOSITIVAS%20RENDICIJ%20C3%93N%20P%20C3%9ABLICA%20FINAL%202018-.pdf> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>17</sup>Ver Anexo 4



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuraduría General del Estado

**D. Medidas de reparación, rehabilitación y reintegración que disponen los niños y niñas que se habrían convertido en víctimas del acoso, trata de personas y violencia sexual por parte de personas coludidas con el narcotráfico.**

38. Es importante señalar que la Ley N° 263<sup>18</sup>, determina mecanismos de protección, atención y reintegración de víctimas que hubieran sido sometidas a Trata y Tráfico de personas, y delitos conexos. Asimismo, establece que el Ministerio Público, en coordinación con el MJTI, adoptará un Protocolo Único de Atención especializada; las instituciones públicas y privadas que correspondan darán especial tratamiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de Trata y Tráfico de Personas, a fin de no afectar su desarrollo integral. El nivel central y las entidades territoriales autónomas, deben garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración, social, económica y cultural de las víctimas.

39. Por lo expuesto y de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores (“DGNPAM”) <sup>19</sup>, el 24 de septiembre de 2015, a la cabeza del MJTI, con la participación del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, se realizó la reunión de articulación del “Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual” con enfoques de prevención, atención y protección. El objetivo general del Programa es garantizar el ejercicio del derecho a la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes. Los objetivos específicos son:

- Promover la implementación de medidas, procedimientos y herramientas para la prevención, protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
- Fortalecer la especialización de las y los profesionales involucrados en la temática de las entidades públicas en todos los niveles, a fin de garantizar la prevención, protección y atención integral.
- Contar con información oficial actualizada sobre situaciones de violencia sexual a niñas, niños y adolescente.
- Diseñar e implementar un Sistema de Registro Nacional y control de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, como medida de seguridad.

<sup>18</sup> ARTÍCULO 29. (PROTECCIÓN). La Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas incluirá un programa de Protección, que contemplará las siguientes medidas: 3. Precautelar la dignidad de las víctimas en todas las etapas del proceso de investigación y juicio oral, así como en programas de reinserción. 6. Brindar seguridad y protección temporal en el entorno familiar y actividades propias que desarrolle la víctima.

<sup>19</sup>Ver anexo 4





40. Asimismo, mediante Resolución Ministerial 213/2014 de 5 de noviembre de 2014<sup>50</sup>, emitida por el entonces Ministerio de Justicia, se crea el Protocolo y Ruta Crítica interinstitucional para la atención y protección a víctimas<sup>51</sup> en el marco de la ley integral para garantizar una vida libre de violencia; ello da origen a la restitución del derecho de las víctimas para recuperar su proyecto de vida, creándose los Centros Especializados de Prevención y Atención Terapéutica (“CEPAT”)<sup>52</sup>, mismos que son dependientes de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, realiza la atención y apoyo emocional de la víctima en virtud a la protección de la Ley N°348. Actualmente, en todos los departamentos se encuentran funcionando los CEPAT según las características y necesidades propias de la población y territorio<sup>53</sup>.
41. Por lo expuesto, las acciones de un CEPAT en las denuncias de violencia sexual, responden a las estrategias de la Instancia Técnica de Políticas Sociales (SEDEGES/SEDEPOS); dentro del límite de sus funciones, tiene como prioridad brindar una atención integral y especializada a los niños, niñas y adolescentes de cada departamento que han sido víctimas de violencia sexual. Es importante mencionar que los CEPAT a nivel nacional, se constituyen en la instancia competente para realizar el trabajo terapéutico (conocimiento de sentencia, proyecto de vida, apoyo escolar, sesiones terapéuticas, contención, informes de valoración de riesgo, actividades técnicas, costura, repostería, etc.) con la víctima para lograr su recuperación y resiliencia, además de coordinar esta asistencia especializada con las instancias de protección como ser: la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los Juzgados y Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, por lo que las medidas de reparación, rehabilitación y reintegración de que disponen las niñas, niños y adolescentes que se habrían convertido en víctimas de acoso, trata de personas y violencia sexual por parte de personas coludidas con el narcotráfico, son asumidas por los CEPAT a nivel nacional.
42. En este sentido, es importante mencionar que el ordenamiento jurídico y las políticas públicas de Estado implementados a través de las instituciones correspondientes, realizó acciones a fin de garantizar la reparación, rehabilitación, reintegro en pro de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, trata y tráfico de personas y delitos conexos.

<sup>50</sup> Resolución Ministerial N° 213/2014 de 5 de noviembre de 2014. (Anexo 6)

<sup>51</sup> Disponible en: <https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/herramienta/f0da117d5444b7fc32a3196ca9324b1.pdf> (Verificado el 1 de abril de 2021)

<sup>52</sup> Disponible en: <https://www.unicef.org/bolivia/informes/centro-especializado-de-prevenci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-terap%C3%A9utica-cepat-0> (Verificado el 19 de marzo de 2021)

<sup>53</sup> Disponible en: <https://www.unicef.org/bolivia/media/556/file/bol-cepat-centro-prevencion-atencion-terapeutica-2018.pdf>. (Verificado el 6 de abril de 2021)

**E. Medidas y políticas que el Estado boliviano ha puesto en marcha para sacar a estos niños y niñas y a sus familias de la pobreza.**

43. El Estado boliviano durante los últimos años redobló esfuerzos para mejorar la situación de las Niñas, Niños y sus familias. A través de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social ("UAGS"), dependiente del Ministerio de la Presidencia, realiza diferentes actividades en beneficio de este sector vulnerable. La Ley N° 1099 del 17 de septiembre de 2018<sup>54</sup>, autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ("MOPSV") la transferencia de parte de los recursos del programa Nacional de telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS al Ministerio de la Presidencia, para que priorice programas y proyectos de interés social, cultural, deportivo y otros<sup>55</sup>.
44. Por su parte, el Decreto Supremo N° 4152 de 13 de febrero de 2020, tiene como objetivo declarar interés del nivel central del Estado la ejecución de infraestructura urbana como parte de las medidas integrales de prevención, atención y protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes. En este contexto, se trabajó en el PROGRAMA INFRAESTRUCTURAL URBANA "BOLIVIA MUJER", dentro del cual existen 34 proyectos a nivel nacional, referentes al área social tomando en cuenta medidas integrales de prevención, atención y protección a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Entre los proyectos a desarrollarse en beneficio de esta población vulnerable en el departamento del Beni, se tiene el dato de los siguientes proyectos:

PROYECTO	ALCALDIA	PRESUPUESTO
Construcción de casa de acogida y SLIM en San Joaquín.	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN	Bs. 4'253.013,311
Construcción de casa de acogida y SLIM - Trinidad.	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Bs. 7'880.276,62
Construcción de casa de acogida y SLIM - Guayaramerin.	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL GUAYARAMERIN	Bs. 4'441.057,77
Construcción de casa de acogida y SLIM - Santa Ana de Yacuma	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YACUMA	Bs. 4'293.827,21
Construcción de casa de acogida y SLIM - San Ignacio.	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	Bs. 4'495.427,61
Construcción de casa de acogida y SLIM - San Ramon.	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	Bs. 4'535.503,14

<sup>54</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/ley1099> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>55</sup> Informe emitido por la Unidad de apoyo a la gestión social del Ministerio de la Presidencia 001/2021, de 11 d marzo de 2021. (Anexo 6)





Fuente: Ver Anexo 6

45. Entre 2005 y 2013, la extrema pobreza en Bolivia se redujo pasando del 38% al 18%, lo que significa que cerca de 2.000.000 de personas superaron la extrema pobreza<sup>56</sup>, alcanzando así, la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hasta diciembre de 2013, el 36,6% de la población boliviana se benefició con las transferencias condicionadas en efectivo, alcanzando a 4.028.517 beneficiados. Además, el 2014 el salario mínimo ascendió en 20% del 2013 y 280% del 2005<sup>57</sup>.
46. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES 2016 - 2020)<sup>58</sup>, aprobado mediante Ley N° 786 de 10 de marzo de 2016<sup>59</sup>, constituye el marco estratégico y de priorización de metas, resultados y acciones a ser implementadas por el Gobierno Central y los Gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas en el ejercicio de sus competencias. En relación a la temática de lucha contra la trata de personas, adoptó lo siguiente:

#### PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016 - 2020

##### PILAR/META/RESULTADO:

PILAR: Erradicación de la extrema pobreza.

Meta 3: En Bolivia, ya no existe las comunidades cautivas, ninguna forma de penguaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil.

RESULTADO 22: Se ha avanzado significativamente hacia la reducción de la trata y tráfico de personas, y delitos conexos.

##### LINEAMIENTOS:

ACCIÓN 1: Prevención, control y sanción en la lucha contra la trata y tráfico de personas y generación de condiciones para la reintegración de las víctimas.

Fuente: Plan de Desarrollo Integral para Vivir Bien

47. En ese contexto, la Ley N° 548, dispone la elaboración de Políticas armonizadas en el Plan Plurinacional de la Niñez y Adolescencia para la implementación del Sistema Plurinacional Integral de Derechos de la Niña, Niños y Adolescente; el Plan mencionado comparte los principios y valores con la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”<sup>60</sup> elevada a rango de Ley N° 650 de 19 de enero de 2015<sup>61</sup>, misma que establece los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana, como Primer Pilar la erradicación de la pobreza, articulando las esferas económica, productiva, social y cultural en un plan nacional de largo plazo que al 2025

<sup>56</sup> Disponible en: <https://www.inc.gov.bo/index.php/inc-la-pobreza-en-bolivia-se-ha-reducido/> (Verificado el 2 de abril de 2021)

<sup>57</sup> Disponible en: [https://www.inc.gov.bo/index.php/wpld\\_file/bolivia-salario-minimo-nacional-1991-2019/](https://www.inc.gov.bo/index.php/wpld_file/bolivia-salario-minimo-nacional-1991-2019/) (Verificado el 2 de abril de 2021)

<sup>58</sup> Disponible en: <http://www.planificacion.gob.bo/pdes/pdes2016-2020.pdf> (Verificado el 29 de marzo de 2021)

<sup>59</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/ley786> (Verificado el 5 de abril de 2021)

<sup>60</sup> Disponible en: [http://www.planificacion.gob.bo/uploads/AGENDA\\_PATRIOTICA2025\\_MPD.pdf](http://www.planificacion.gob.bo/uploads/AGENDA_PATRIOTICA2025_MPD.pdf) (Verificado el 14 de marzo de 2021)

<sup>61</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/ley650> (Verificado el 19 de marzo de 2021)



conseguirá la erradicación de la extrema pobreza y el desarrollo pleno e integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Cabe recalcar que incorpora la Filosofía del VIVIR BIEN.

48. En ese marco, la nueva política económica que ha consolidado a Bolivia como un país con ingresos medios a través de la Ley N° 358 de 17 de mayo de 2005<sup>62</sup> que tiene por objeto principal generar recursos económicos para fortalecer un proceso sustentable de desarrollo económico y social a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH; es importante señalar el Decreto Supremo 28421 de 21 de octubre de 2005<sup>63</sup> indicando expresamente que debe utilizarse para mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, en especial de las niñas, niños y adolescentes, lo que está permitiendo superar la dependencia de los financiamientos externos.

49. Por lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano implementó medidas dirigidas para reducir los índices de pobreza; asimismo, es importante mencionar que el número de beneficiarios de las políticas públicas a través de las distintos programas implementadas por el Estado tuvieron un significativo impacto en la reducción de la pobreza.

**F. Medidas adoptadas por el Estado boliviano para garantizar que los defensores de derechos humanos en Bolivia pueden desarrollar sus funciones sin miedo a sufrir actos de intimidación, acoso y represalias.**

50. Tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, se han aprobado diversas resoluciones especializadas en defensoras y defensores de derechos humanos que han modelado mecanismos especializados de protección.

51. El Estado boliviano a través de la CPE incorpora por primera vez principios generales de compromisos internacionales en materia de derechos humanos; en ese sentido, la CPE determina que los derechos reconocidos por la misma son inviolables, interdependientes, indivisibles y progresivos; comprometiéndose a promoverlos, protegerlos y respetarlos<sup>64</sup>. De la misma manera, la CPE establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y se prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno conforme lo establecieron en el Artículo 410<sup>65</sup> de la CPE, constituidos en el bloque de constitucionalidad.

<sup>62</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/Ley%203058> (Verificado el 8 de abril de 2021)

<sup>63</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/DECRETO%20SUPREMO%2028421> (Verificado el 8 de abril de 2021)

<sup>64</sup> Artículo 13. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

<sup>65</sup> Artículo 410. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos



En el ámbito internacional, el Estado boliviano, mediante Ley N°1434 de 11 de febrero de 1993<sup>66</sup> ha aprobado la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica, cuyo propósito principal está orientado al desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión.

52. Asimismo, es de destacar que, por el principio de aplicación directa de los derechos humanos, cualquier ciudadano incluyendo los defensores de derechos humanos tiene a su disposición la justicia constitucional a través de la Ley N°1104 de 27 de septiembre de 2018<sup>67</sup>, normativa que implementó el funcionamiento de las Salas Constitucionales instancias ante las que pueden interponer las acciones previstas en la CPE.
53. Por lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano implementó medidas dirigidas para la protección de los derechos humanos de las y los bolivianos, incluyéndose a los defensores de derechos humanos, de ahí que todos tienen los mecanismos y acciones de defensa en caso de ser sujetos de alguna vulneración a sus derechos humanos.

**G. Los hechos acontecidos con relación al 12 de junio de 2020 en la comunidad Amazónica de Bella Vista, en el departamento de Beni - Bolivia.**

54. De acuerdo a la información proporcionada por el Comando General de la Policía Boliviana en fecha 18 de junio de 2020<sup>68</sup>, a través de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural de Beni (“UMOPAR - BENI”), se apersonaron oficiales de la Policía Boliviana a cargo del Tcnl. Erick Arturo Mcalla Ortega, con el objeto de verificar la denuncia por el supuesto hecho de narcotráfico. El ex alcalde de la Localidad de Magdalena, Sr. Tommy Añez, manifestó que habitantes de la localidad de Bella Vista habrían retenido una avioneta con número de Matrícula CP-2804, el viernes 12 de junio a horas 18:00 pm aproximadamente en la pista de la mencionada localidad; posteriormente fue trasladado por los comunarios del lugar a la plaza principal. A requerimiento del Sr. Fiscal se procedió a secuestrar y precintar la aeronave y los vehículos encontrados al interior del hangar ubicado sobre la pista y el mismo hangar.
55. Mediante la información remitida por la Defensoría del Pueblo<sup>69</sup>, se tiene conocimiento que se llevó adelante una reunión conjunta con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Beni y la Conferencia de Religiosos del Beni; y que en esta oportunidad la información proporcionada no hizo referencia a denuncias sobre presuntos hechos de abuso y explotación

autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

<sup>66</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/Ley%201434> (Verificada el 6 de abril de 2021)

<sup>67</sup> Disponible en: <https://web.senado.gob.bo/sites/default/files/LEY%20N%C2%B01104-2018.PDF> (Verificado el 1 de abril de 2021)

<sup>68</sup> Informe SGRAL. CMDO. GRAL.CITE: N°0447/21 de 10 de marzo de 2021, emitido por el Comando General de la Policía. (Anexo 7)

<sup>69</sup> Ver Anexo 5



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

sexual de niñas, niños y adolescentes, sino más bien señalan expresamente que su preocupación es referente a la inseguridad que se vive en Bella Vista por la presencia de personas ligadas al narcotráfico; razón por la que, ante las denuncias transmitidas, el Delegado Defensorial señaló la premura de una urgente reunión conjunta con el Comandante Departamental de la Policía del Departamento del Beni para poner en su conocimiento la situación de la comunidad.

56. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, expresó que habiendo tomado conocimiento de los hechos expuestos en la Comunicación, se ha dispuesto el inicio de una investigación defensorial de oficio, el cual está registrado con el caso [REDACTED]
57. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ("FGE")<sup>70</sup>, sobre los hechos acontecidos en la localidad de Bella Vista - Beni; informó que se iniciaron de oficio dos (2) casos investigativos en junio de 2020, a saber:

1. Caso con código único [REDACTED] de oficio por el Ministerio Público, contra [REDACTED] y otros por la presunta comisión de los delitos de Proxenetismo, Tráfico de Persona, Abuso Sexual y Organización Criminal, previstos en los Artículos 321, 281 bis, 312 del Código Penal<sup>71</sup>. Este proceso actualmente se encuentra en Etapa Preliminar.
2. Caso con código único [REDACTED] de Oficio por el Ministerio Público, contra Autor/Cómplices por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas. Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oil, Gasolina y Gas Licuado de Petróleo, previsto en los Artículos 48 Inc. m) de la Ley N° 1008 de 19 de julio de 1988<sup>72</sup> y 226 de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011<sup>73</sup>. Este proceso actualmente se encuentra con resolución de rechazo, amparado en el Artículo 304 conforme los Inc. 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal ("CPP").

58. De esta forma, se establece que el Estado asume la obligación de investigar los hechos acontecidos en Bella Vista - Beni, dentro de ese marco cabe señalar que si bien existe un proceso que se encuentra con resolución de rechazo, este es posible objetar conforme el Artículo 305<sup>74</sup> del CPP. En ese sentido, tomando en cuenta que la Defensoría del Pueblo inició

<sup>70</sup> Informe OF.CTTE: FGE/JLP N° 269/2021 de 11 de marzo de 2021, emitido por la Fiscalía General del Estado (Anexo 8)

<sup>71</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/Ley%201005> (Verificado el 3 de abril de 2021)

<sup>72</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/Ley%201008> (Verificado el 6 de abril de 2021)

<sup>73</sup> Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/Ley%20100> (Verificado el 6 de abril de 2021)

<sup>74</sup> Artículo 305. Las partes podrán objetar la resolución de rechazo, en el plazo de cinco días a partir de su notificación, ante el fiscal que la dictó quien remitirá antecedentes al fiscal superior en jerarquía, dentro de las veinticuatro horas siguientes. El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y en caso de ratificación, el archivo de obrados. El archivo de obrados no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante.





un proceso de investigación [REDACTED] es probable que la reapertura del caso se dé más adelante.

59. En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo al informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ("FELCC")<sup>75</sup>, el hecho que los comunarios de la localidad de Magdalena, impidieron el ingreso del personal de UMOPAR, para que continúe con las investigaciones y realice la pericia necesaria, implica en cierta forma una obstaculización al trabajo que la Comisión de Investigadores de la FELCC debe realizar.
60. Es importante, señalar la reunión sostenida con el Sub Comandante Departamental de la Policía del Beni<sup>76</sup> Cnl. Tito Lucero conjuntamente con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Beni, Conferencia de Religioso del Beni y el Delegado Defensorial; teniendo como resultado de este encuentro, el compromiso de designar dos (2) efectivos policiales con la finalidad de fortalecer la unidad policial de Bella Vista.
61. De lo expuesto, el Estado demuestra que se han iniciado las investigaciones correspondientes al hecho acontecido en Bella Vista - Beni; las instituciones correspondientes están realizando las acciones necesarias en el marco de la normativa vigente y se hará el seguimiento correspondiente al avance de éstas.

#### IV. CONCLUSIONES

62. Por lo expuesto y tras el respectivo análisis de los hechos, se tiene a bien concluir lo siguiente:
- 1) Conforme a lo expresado en el presente escrito, se establece que el Estado boliviano ha diseñado e implementado políticas destinadas a garantizar los derechos y avances considerables para combatir los delitos de la trata y tráfico de personas, y delitos conexos, institucionalizando la prohibición del mismo y promulgando la Ley N° 263, Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, norma que crea una estructura institucional como una instancia máxima de coordinación y representación para formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional, Departamental contra la Trata y Tráfico de personas, y delitos conexos, sin discriminación, con equidad de género, generacional e interculturalidad.
  - 2) Con relación a las medidas adoptadas con el objetivo de luchar contra la Trata y Tráfico de personas y delitos conexos, el Estado boliviano ha demostrado que a lo largo de los últimos años ha implementado mecanismos, políticas de Estado, programas nacionales y departamentales destinados a la lucha y erradicación de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Es así que, se aprueba la Ley 263 Ley Integral contra la Trata y Tráfico de personas que garantiza los derechos fundamentales de las víctimas a través de

<sup>75</sup> Ver Anexo 8

<sup>76</sup> Ver anexo 5





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos; asimismo la Ley N° 264 del Sistema de Seguridad Ciudadana “para una Vida Segura” que tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida, con el propósito de alcanzar el Vivir Bien.

- 3) De lo expuesto, se evidencia que el Estado boliviano realiza las acciones y tomó las medidas necesarias para efectivizar la defensa y protección de los derechos de los defensores de D.D.H.H. a través de la regulación de las mismas conforme normativa interna.
- 4) Asimismo, a través de los informes presentados por las instancias correspondientes al Órgano Ejecutivo, se puede evidenciar que la implementación de proyectos y políticas de Estado que tienen por objeto sacar a las familias de la extrema pobreza; actualmente se cuenta con un índice elevado de los beneficiarios.
- 5) El Estado ha realizado una contextualización con relación a los hechos ocurridos en la comunidad Amazónica de Bella Vista, en el departamento de Beni - Bolivia, por lo que considera que en el marco del ordenamiento jurídico se están desarrollando los procesos de investigación; realizando así los esfuerzos necesarios para sancionar a los responsables de dichos actos que van contra la norma jurídica. No obstante lo señalado, es necesario resaltar que los comunarios del Bella Vista - Beni no permitieron iniciar con los procesos de investigación dentro de la comunidad, pese a las acciones de obstaculización de los comunarios a las medidas de investigación empleadas por el Estado; las instancias correspondientes se encuentran realizando los esfuerzos necesarios para cumplir lo que establece la Ley.

El Alto, abril de 2021.

Respetuosamente presentado,


Abog. Wilfredo Franz David Chávez Serrano  
Procurador General del Estado





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

  
Abog. Patricia Guzmán Meneses  
Subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado

  
Abog. Ithanneth del Rosio Bustillos Bustillos  
Directora General de Defensa en Derechos Humanos y Medio Ambien

